

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO



DIP. MARIA MERCEDES MACIEL ORTÍZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA AL CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E .

Quien suscribe, Diputada integrante de esta XV Legislatura,
SANDRA GUADALUPE MORENO VÁZQUEZ, en los términos del
artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la
consideración de esta honorable Asamblea proposición con
PUNTO DE ACUERDO, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El próximo 15 de mayo inicia la temporada de huracanes, aunque estamos concentrados los tres órdenes de gobierno en atender lo relacionado con el COVID19, no tenemos que perder de vista que el coronavirus no es el único problema al que podríamos enfrentarnos, las lluvias y los huracanes pueden generarnos emergencias adicionales .

Es preciso recordar que la obligación primordial de las autoridades mexicanas, en todos los niveles es la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como lo establece nuestra Carta Magna, en su artículo primero, que establece:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados

internacionales de la materia FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA....”

En materia de PROTECCIÓN CIVIL, hemos trabajado la parte legislativa, ya que contamos con un ley estatal que establece las bases de coordinación y colaboración con la Federación, con otras Entidades Federativas y con los municipios del Estado de Baja California Sur, así como organismos e instituciones del sector público, privado, social y educativo para proteger y preservar los bienes fundamentales como son: la vida humana, la salud, la familia, su patrimonio, el entorno la planta productiva y el medio ambiente.

En cumplimiento con la ley General de Protección Civil y la correlativa estatal se instala el sistema de Protección Civil en las situaciones de riesgo y se toman precauciones, se monitorean los fenómenos naturales que amenazan o llegan a afectar a la población, así como las acciones que desempeñan los grupos de rescate y pese los estragos que han originado los fenómenos naturales ha sido posible prestar auxilio, tanto antes, durante como después de pasado el suceso. No obstante, ha sido una queja constate de la población en diferentes comunidades del Estado y sobre todo del Municipio de Los Cabos por los daños que

sufren debido a que sus viviendas han sido construidas en áreas inseguras.

Estas situaciones han llevado a diversos legisladores a proponer reformas, incluso al Código Penal para fincar responsabilidades tanto a fraccionadores como a los servidores públicos que autoricen la construcción de viviendas en las zonas de riesgo, así en noviembre de 2017 se tipificó como fraude en el artículo 239, cuyo texto se transcribe:

“Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de hasta cien días.”

“Artículo 241. Fraude específico. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien:

XXIII. La persona física o jurídica que enajene bienes inmuebles pertenecientes a un conjunto habitacional, fraccionamiento o condominios cuya construcción se llevó a cabo en predios ubicados en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos por las

autoridades competentes, ocultando al comprador esta condición o habiendo obtenido las licencias correspondientes oculten al comprador que no eran mitigables o que no se realizaron las obras de mitigación en términos de la legislación en la materia. “

“Artículo 270. Ejercicio ilícito del servicio público. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

VII. Por sí o por interpósita persona, autorice licencias de construcción o uso de suelo, que permita cualquier tipo de construcción en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos por las autoridades competentes, no mitigables o que siendo mitigable no se hayan realizado previamente las obras de mitigación en términos de la legislación en la materia.

Al penalmente responsable de las fracciones II, IV, V, VI y VII se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de cien a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.” (hasta aquí la transcripción)

La acción legislativa que se realizó será inútil, porque estas disposiciones no pueden ser aplicadas si no contamos con los atlas

de riesgos estatal y municipales, ya que son los instrumentos adecuados e indispensables para determinar si un área es o no segura para construir inmuebles, trátese de viviendas o para otro uso.

El artículo segundo de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado de Baja California Sur, en su fracción XI define el Atlas de Riesgo como “Sistema Integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros de vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables”, el cual le corresponde desarrollar y actualizar constantemente a la Coordinación Estatal de Protección Civil, conforme lo establece el artículo 17 de la citada ley y aunque la facultad de supervisar que se realicen y se actualicen le corresponde a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, es interés de esta Representación Popular que se cuente con dichos instrumentos.

Según el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, “El Atlas se integra con la información a nivel nacional, de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo;...”

Si queremos cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad de brindar protección a la vida, la salud y el patrimonio de los habitantes del Estado es indispensable que Baja California Sur y sus Municipios cuenten con sus respectivos ATLAS DE RIESGOS ya que son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para reducir el riesgo de desastre, por ello someto a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- La XV Legislatura del Estado de Baja California Sur exhorta respetuosamente a la Coordinación Estatal de Protección

Civil y a los Honorables Ayuntamientos de Loreto, Comondú, Mulegé, Los Cabos y La Paz, para que desarrollen y Actualicen los ATLAS ESTATAL Y MUNICIPALES DE RIESGOS, respectivamente, a efecto de brindar una efectiva protección civil a la población en general.

SEGUNDO.- Se solicita a las entidades exhortadas en el punto anterior que informen a esta Representación Social sobre el inicio o avance en su caso que registre en la integración de los Atlas de Riesgos a través de la Comisión Permanente de Protección Civil de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado.

TERCERO.- Se encomienda a la Comisión Permanente de Protección Civil de este Congreso del Estado para que se comunique con las entidades exhortadas para que en la medida de lo posible gestionar el apoyo técnico y económico necesario para la integración de los Atlas de Riesgos.

ATENTAMENTE

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 5 DE MAYO DE 2020

DIP. SANDRA GUADALUPE MORENO VÁZQUEZ

